



San Andrés, Isla, Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Veintitrés (2023)

RADICACIÓN: 88-001-4003-003-2023-00156-00
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELANTE: PATROCINIO ENRIQUE MARENGO
TORRENEGRA
TUTELADO: SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO
S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS

SENTENCIA No. 00079-2023

1. OBJETO

Procede el Despacho a decidir la acción de tutela instaurada por el señor PATROCINIO ENRIQUE MARENGO TORRENEGRA quien actúa en nombre propio, en contra de SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS.

2. ANTECEDENTES

El señor PATROCINIO ENRIQUE MARENGO TORRENEGRA, interpuso acción de tutela por razón de los hechos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta que en fecha 29 de mayo de 2023, canceló a la empresa CDA CONTROL AUTOS, la suma de \$155.233 pesos, por concepto de revisión tecno mecánica de la motocicleta Honda, color negro, placa SQL73B.

Señala que ese día la moto referida en precedencia, no paso la respectiva revisión tecno mecánica, por lo que los técnicos encargados le dieron un plazo de 15 días hábiles para realizar los respectivos arreglos.

Posteriormente, en fecha 13 de junio del año en curso, llevó nuevamente la moto a CDA CONTROL AUTOS, para realizar nuevamente la revisión, a la cual se negaron a realizar inicialmente, y luego del pago de un bono de \$20.000 pesos, acceden a realizarla, pero no le entregan el certificado que acredite que la moto paso la prueba de revisión tecno mecánica, bajo el argumento que ya lo habían bajado del sistema y que tenía que pagar el valor inicial para expedir el certificado.

Indica que, en fecha 16 de junio de 2023, instauró derecho de petición ante la empresa CDA CONTROL AUTOS, con el fin de que le entregaran el certificado de revisión donde conste que su moto paso la prueba de revisión tecno mecánica.

Señala que, la empresa SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO- CDA CONTROL AUTOS, le respondió alegando que debió haber realizado las reparaciones indicadas verbalmente en fecha 29 de mayo del año en curso, dentro de los 15 días calendarios a la respectiva moto.

No obstante, arguye el accionante que no le asiste razón a la empresa accionada, toda vez que, llevo la moto en un término inferior a los 15 días hábiles otorgados, por lo tanto, considera haber cumplido con el termino reglamentario.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en los anteriores hechos, el señor PATROCINIO ENRIQUE MARENGO TORRENEGRA, solicita:

- 3.1.** Que se tutele a su favor el derecho fundamental de petición.
- 3.2.** Se ordene a la empresa accionada realizar la revisión tecno mecánica a la moto del accionante y expedir el certificado de revisión aprobado sin ningún costo adicional.

3. ACTUACIÓN JUDICIAL

Mediante Auto N° 00462-23 de fecha diez (10) de Julio de dos mil veintitrés (2023), se admitió la presente acción de tutela, donde se ordenó comunicarle a SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS, con el fin de que contestaran la presente solicitud y rindiera los informes del caso dentro del término de dos (2) días, de la presente acción.

El anterior auto fue notificado mediante correo electrónico el día 10 de Julio del año en curso, los soportes de la notificación reposan dentro del expediente electrónico archivo No.06.

5.- CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA

Vencido el término de traslado, se observa que SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS, dio contestación a la presente acción constitucional, indicando frente a los tres primeros hechos que son ciertos, de conformidad con las pruebas aportadas.

Por su parte, frente al cuarto hecho señaló que, es parcialmente cierto, toda vez que, el accionante tal como lo indica en el hecho tercero, se le informó que de acuerdo a la Resolución 5111 de 200 (sic) en concordancia con la Resolución 3625 de 2020 por el MIN TRANSPORTE, contaba con un término de 15 días calendario para acercarse y realizar el examen del vehículo; sin embargo, antes de la fecha indicada por el actor en el hecho número 4 de la acción de tutela, el señor PATRICINIO ENRIQUE MERENGO TORRENEGRA asistió a la segunda revisión el día 10 de junio de 2023, es decir, en un término no superior a 11 días posteriores al primer examen en el que, tal como lo indica en la prueba aportada en el acápite de la tutela, el vehículo el cual arrojó como resultado “no apta en emisión de gases”. (lo anterior se puede verificar en documento anexo a la tutela en folio N° 12 a 17- observar fecha de revisión).

De lo anterior, el señor PATRICINIO ENRIQUE MERENGO TORRENEGRA se retira de las instalaciones con el documento de revisión sin haberlo aprobado y regresa a las instalaciones del CDA en fecha indicada por el para una nueva revisión mencionando que había hecho los correctivos correspondientes. Luego de ello, se le comunicó que debía cancelar el valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 155.233) para una nueva revisión, entendiéndose que ya había agotado el recurso posterior a la primera revisión y que su información se encontraba fuera del sistema.

Frente al quinto hecho, señaló que No es cierto ni se encuentra aprobado, toda vez que el test preventivo ofrecido para verificar las condiciones del vehículo previo a tomar el servicio de la prueba tecno mecánica que consta de 2 intentos ya el cliente había consumido 1 intento, tenía amplio conocimiento de las condiciones del servicio prestado ya que estas se encuentran firmadas por el sr. PATRICINIO ENRIQUE MERENGO TORRENEGRA como consta en folio N° 5 al 11.

Finalmente, frente al sexto y séptimo hecho, indicó que es cierto, toda vez que el accionante si presentó derecho de petición ante las instalaciones de la empresa con fecha 16 de junio de 2023 y que fue respondido mediante oficio fechado 30 de junio del mismo año. En la respuesta se le dio nuevamente a conocer al actor las causales de porque debía pagar el valor de la revisión.

En ese orden de ideas, solicita al despacho negar el amparo por improcedente toda vez que no se cumple con los requisitos mínimos señalados en el Decreto 2591 de 1991. Desde ahora manifiesto que me opongo a todas y cada una de las pretensiones que fueran encaminadas, toda vez que, no se han vulnerado derechos fundamentales.

6.- CONSIDERACIONES

6.1. COMPETENCIA:

De conformidad con el numeral 1° del Art. 1° del Decreto 1983 del 2017, este Despacho es competente para conocer la presente solicitud de tutela.

La norma citada, respecto *del reparto de la acción de tutela*, dispone lo siguiente:

“(…) Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital, municipal y contra particulares, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a los jueces municipales”. Lo anterior por ser la tutelada una entidad de la orden Departamental encargada del control poblacional.

Frente a la competencia, según el criterio del lugar donde se haya producido el hecho o sus efectos, los mismos tuvieron ocurrencia en la Isla de San Andrés.

Así las cosas, son los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de San Andrés, los competentes para conocer la presente solicitud de tutela, según el correspondiente reparto.

6.2. PROCEDENCIA:

El Artículo 86 de la Constitución Política de 1991, desarrollado en los Decretos 2591 y 306, ambos del mismo año, ha institucionalizado la acción de tutela como una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y de los particulares, en los casos que establezca la ley.

Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto y garantía a la consagración constitucional y legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente defina el fondo del asunto.

En el presente asunto, se trata del ejercicio de la Acción de Tutela incoada contra el ente departamental por tanto es procedente, al tenor de los Artículos 5º y 42 Numeral 2º del Decreto 2591 de 1991.

6.3. PROBLEMA JURÍDICO

A partir de los supuestos fácticos planteados anteriormente, el problema jurídico que debe resolver el Despacho consiste en establecer ¿si SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS, amenaza y/o vulnera o no el derecho fundamental de petición del señor PATROCINIO ENRIQUE MARENGO TORRENEGRA, quien actúa en nombre propio, al no resolver de fondo la petición de fecha 16 de junio de 2023 y emitir el respectivo certificado de revisión tecno mecánica de la motocicleta Honda, color negro, placa SQL73B?

6.4. ANÁLISIS NORMATIVO Y/O JURISPRUDENCIAL DE LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS O AMENAZADOS

6.4.1. DERECHO DE PETICIÓN

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Asimismo, esa norma estableció que el legislador podría reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Ley 1755 del 30 de junio de 2015, es la nueva normatividad que regula el derecho de petición, estableciendo las siguientes reglas, y sustituyendo las disposiciones legales anteriores, previstas en la Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.*

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”.

Sobre lo anterior, La Corte Constitucional, en sentencia T-369/13 del 27 de junio de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, ha establecido los presupuestos mínimos que determinan el ámbito de protección constitucional y ha definido sus rasgos distintivos en los siguientes términos:

“(i) Se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;

(ii) Este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y a los particulares;

(iii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario;

(iv) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: a) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado; y b) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

(v) La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

(...)

Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. (Negrilla del Despacho).

Al respecto, en sentencia T-138 del 2017 Luis Guillermo Guerrero Pérez, la H. Corte expresó:

“El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 del Texto Superior como una garantía fundamental de las personas que otorga escenarios de diálogo y participación con el poder público y que posibilita la satisfacción de otros derechos constitucionales en el marco del Estado social de derecho. Su núcleo esencial se encuentra en la posibilidad de presentar solicitudes de manera respetuosa ante las autoridades públicas o ante los particulares en los casos previstos en la ley, surgiendo a cargo de sus destinatarios el deber de recibirlas, tramitarlas y resolverlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido.

En relación con lo expuesto y con énfasis en la obligación de tramitar y resolver las peticiones, esta Corporación ha señalado que la respuesta que se brinde debe cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos: (i) debe ser concedida de manera pronta y oportuna dentro del término legal; (ii) su contenido debe dar una solución de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia; y (iii) la decisión que se adopte debe ser puesta en conocimiento del interesado con prontitud. A continuación, se hará una breve referencia a los elementos previamente mencionados”.

6.5. CASO CONCRETO

Encuentra el Despacho que de acuerdo con lo manifestado por el señor PATROCINIO ENRIQUE MARENGO TORRENEGRA, la empresa accionada, vulnera su derecho fundamental de petición, al no resolver de fondo la petición de fecha 16 de junio de 2023 y emitir el respectivo certificado de revisión tecno mecánica de la motocicleta Honda, color negro, placa SQL73B.

Es así como, el artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario, mediante el cual se busca evitar, de manera inmediata, la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Su procedencia está condicionada a que *“el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”*. Sin embargo, la H. Corte Constitucional ha señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. En el marco del caso concreto, el juez constitucional debe analizar si la acción dispuesta por el ordenamiento jurídico es idónea y eficaz para proteger los derechos fundamentales comprometidos. En el evento en que no lo sea, la acción de tutela procederá para provocar un juicio sobre el fondo.

La Jurisprudencia constitucional ha reiterado que, conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, pues para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, cuando los derechos fundamentales del accionante resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición tardía de actos administrativos propios de la referida jurisdicción, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de las garantías constitucionales para evitar un daño irreparable.

En el caso bajo estudio, encuentra este Despacho que SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS, dio contestación a la presente acción constitucional, indicando que, el accionante si presento derecho de petición ante las instalaciones de la empresa con fecha 16 de junio de 2023 y que fue respondido mediante oficio fechado 30 de junio del mismo año. En la respuesta se le dio nuevamente a conocer al actor las causales de porque debía pagar el valor de la revisión tecno mecánica.

En ese sentido, se observa que, en cuanto al derecho fundamental de petición, es claro que las autoridades y los particulares están obligados a resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que deben brindar una respuesta que aborde de manera clara y detallada cada una de las inquietudes y/o solicitudes puestas en su conocimiento, lo anterior no implica nada diferente a resolver materialmente la petición.

La Jurisprudencia Constitucional ha indicado que una respuesta de fondo deber ser clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; precisa,

de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.

Así, la respuesta a un derecho de petición no siempre tiene que ser positiva, pero la misma, si debe resolver de fondo punto por punto y paso por paso, lo solicitado por el peticionario, así esto signifique una respuesta negativa.

En ese sentido, la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 14, dispone que *“salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”*.

En síntesis, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las entidades encargadas de reconocer prestaciones sociales y a recibir una respuesta en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, esto es, a obtener respuesta oportuna y de fondo.

Así las cosas, se observa del recaudo probatorio allegado en el traslado de la acción constitucional, que el accionante radico derecho de petición ante la empresa CDA CONTROL AUTOS, el día 16 de junio de 2023, mediante el cual solicito que se le realizara la revisión tecno mecánica o en su defecto se hiciera entrega del certificado en el cual se indicara que la motocicleta Honda, color negro, placa SQL73B, si paso la revisión tecno mecánica.

En concordancia, se aportó junto al libelo de la acción constitucional, repuesta de la empresa CONTROL AUTOS CDA, de fecha 30 de junio del año en curso, mediante la cual, se le indicó al accionante que de acuerdo a la Resolución 5111 de 2000:



REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES
PARA MOTOS Y CARROS

De acuerdo a su solicitud escrita le informo por este medio

- No se puede realizar revisión o prueba tecno mecánica porque ya usted consumió los dos intentos de prueba que usted adquirió en su momento.
- Para poder tomar nuevamente el servicio, el sr. PATROCINIO MARENGO TORRENEGRA tendría que comprar un nuevo pin.
- No se puede entregar certificado de revisión aprobado porque el vehículo no paso las pruebas anexo resultados de ambas pruebas como soporte.

De lo anterior, se obtiene que, dado que la motocicleta **no paso las dos pruebas de revisión tecno mecánica** a las que tenía derecho con el primer valor pagado, realizado en fecha de 29 de mayo de 2023, la cual fue reprobada en razón a:

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI___	NO_X_	N° Consecutivo RUNT: (R)166165710
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)		
APROBADO: SI___	NO___	

Nota: Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
 - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

y la segunda revisión el día 10 de junio del año en curso,

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI___	NO_X_	N° Consecutivo RUNT: (R)166165710
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)		
APROBADO: SI___	NO___	

Nota: Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
 - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN: 4-20915 [2023-05-29 10:42AM]

De conformidad, no le es posible a la entidad accionada resolver el derecho petición de forma favorable a las pretensiones del accionante, sin embargo, se obtiene que la respuesta dada si fue de fondo, y explicó paso por paso, las razones por la cual no se le emitió el respectivo certificado de revisión tecno-mecánica de aprobado.

Por lo anterior, no podría hablarse en el caso concreto de una vulneración al derecho fundamental de petición, toda vez que SOINVERTEC DEL ARCHIPIELAGO S.A.I. S.A.S. – CDA CONTROL AUTOS, resolvió de fondo la solicitud impetrada por el accionante, desde el día 30 de junio de 2023. Por lo tanto, nos encontramos frente a lo que la Jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha denominado hecho superado por carencia actual de objeto.

Frente al hecho superado en las acciones de tutela, la H. Corte Constitucional en Sentencia T- 358 de 2014 ha manifestado que:

La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria.

En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir.

La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. Entonces, cuando cesa la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

En este sentir, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, de suerte que la Corte ha entendido que una decisión judicial bajo estas condiciones resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de tutela.

De acuerdo con lo anterior, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada,

la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. Tenemos entonces, que cuando se presenta el fenómeno de hecho superado, en términos de decisiones judiciales, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo.

Concluye la suscrita, y sin necesidad de hacer mayores elucubraciones al respecto, que se cumple lo contemplado en la anterior jurisprudencia, como quiera que hay carencia actual de objeto por hecho superado, ya que, entre la presentación de la acción de tutela y fallo de este despacho, se encuentra reparada la amenaza y/o vulneración de los derechos cuya protección se reclamaba, por lo que el Despacho declarará improcedente la acción ante la carencia actual del objeto por hecho superado.

En mérito de lo anterior, **EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS ISLA**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la presente acción de tutela, al presentarse un hecho superado por carencia actual de objeto, en virtud de las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente sentencia en la forma ordenada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Contra la presente procede el recurso de impugnación

CUARTO: Si éste fallo no fuere impugnado oportunamente, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

INGRID SOFÍA OLMOS MUNROE
JUEZA

LHR

Firmado Por:
Ingrid Sofia Olmos Munroe
Juez

Juzgado Municipal
Civil 003
San Andres - San Andres

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6c1322945b31f4e6b5686cb8b70212d319af48cb8eaf611d872b09a9688dd75b**

Documento generado en 24/07/2023 05:33:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>